

EL BIEN PÚBLICO

DIARIO DE LA MAÑANA

REDACCION Y ADMINISTRACION, CERRITO 84

DIRECTOR—JUAN ZORILLA DE SAN MARTIN

AVISOS Y SOLICITADAS HASTA LAS 6 DE LA TARDE

SUSCRICION

Por un mes \$ 1 50
Un número del día 0 10
Un número atrasado 0 20

ESTE DIARIO
SE PUBLICA
POR SU TIPOGRAFIA A VAPOR
Calle del Cerrito 84

TIPOGRAFIA A VAPOR
DE
EL BIEN PUBLICO
En este establecimiento se hacen
todas clases de trabajos
concernientes al ramo, con prontitud
y exactitud.
CALLE CERRITO 84

A NUESTROS SUSCRITORES

Desde el 17 hemos cambiado el personal y organizacion de nuestros repartidores. Con este motivo es posible que se produzca alguna interrupcion. Y al fin de remediarla, rogamos a nuestros suscritores tengan a bien darnos inmediato aviso de las faltas que ocurrieren.

La Administracion.

Almanaque
Viernes 4. La Traslacion de san Martin y san Laureano.
Luna llena a las 5, 51 m. de la tarde.
El sol sale a las 7.12 y se pone a las 4.52.

EL BIEN PÚBLICO

MONTEVIDEO, JULIO DE 4 1879.

La mano oculta

Y LA OBRA DE LA CORRUPCION

Lo hemos dicho antes de ahora: el manejo del incesante no es compatible con la buena memoria. Asi, hay cierto género de escritores de diarios que, en materia de borrar con el codo lo que escriben con la mano, no reconocen rival en uno ni en otro hemisferio terrestre.

Ejemplo al calor: La Nacion.
Decia este diario en su número del domingo 29 de Junio:

«La reglamentacion de la sociedad conyugal pertenece privativamente al Estado, sin tener en cuenta para nada la creencia religiosa de los conyuges, a quienes la ley civil debe considerar y considerar como contrarios simplemente.»

Esto era brutal; equivalia a glosar en lenguaje ofensivo el dicho del internacionalista belga: «No necesitamos de Dios para llevar libremente nuestras mujeres al amor, nuestros muertos al hoyo.» Lo dijimos así. Y La Nacion apareció de haber sostenido una barbaridad, niega ayer que hubiese dicho tal cosa. No hemos hablado de Dios, dice; solo hablabamos de los haraganes y codiciosos de las curas.

Perdon, colega; Vd. hablaba de toda creencia religiosa, y como la creencia religiosa es el único lazo que mantiene la necesaria union del hombre con su Creador, al excluir a toda creencia religiosa, excluia Vd. a Dios.

Pero hemos tomado la pluma para algo mas que poner de relieve la estúpida variedad de opiniones respecto a lo que toca a las atribuciones de los gobernantes sobre la vida, el matrimonio y la muerte, nace de la ignorancia supina en que esos colegas están sobre la naturaleza de esos tres grandes actos y sobre la historia de sus relaciones con los poderes civiles.

Respecto al bautismo, hemos dicho algo en otros artículos anteriores. Tocante al matrimonio, no bastaria sacar aquí a colacion todas las legislaciones antiguas y modernas, exceptuadas las revolucionarias. Pero de esta labor, impropia y fastidiosa, menos para nosotros que para nuestros constantes lectores, nos releva un jurista eminente, cuya autoridad y cuyo nombre deben ser una garantía para La Nacion y El Siglo.

Es el Dr. Velez Sarsfield, el autor del Código Civil Argentino, que en el artículo 90. del Título I referente al Matrimonio,

«Las diversas comuniones cristianas, los cultos idólatras, los religiosos que admiten la poligamia y las que autorizan el divorcio, están acordes en dar al matrimonio un carácter religioso. De los Códigos modernos, solo el de Bélgica, el del Ducado de Baden, y últimamente el de Cerdeña hacen del matrimonio un simple acto civil, que para su validez no requiere la consagracion de la Iglesia. Los pueblos sujetos a la Iglesia Griega reconocen un sacramento en la union conyugal, y la celebracion del matrimonio debe hacerse en conformidad con las leyes de la Iglesia. Las naciones que siguen las religiones protestantes, aunque miran el matrimonio como un contrato civil, han juzgado que el simple contrato no basta para dar al matrimonio el carácter que debe tener y han dispuesto que, para ser válido, debe celebrarse ante la Iglesia y por un sacerdote de la religion de los esposos. Podemos decir entonces, que en todas las naciones de Europa y de América, con excepcion de tres, el matrimonio civil del Código francés no ha encontrado imitadores.

«Las personas católicas, como las de los pueblos de la República Argentina no podrian contraer matrimonio civil. Para ellas seria un perpetuo concubinato, condenado por su religion y por las costumbres del pais. La ley que autorizara tales matrimonios, en el estado actual de nuestra sociedad, desconoceria la mision de las leyes, que es sostener y acrecentar el poder de las costumbres, y no enervarlas y corromperlas. Seria incitar a las personas católicas a denunciar los preceptos de su religion, sin resultado favorable a los pueblos y a las familias.

Resulta, pues, falso histórico y jurídicamente que pertenezca al Estado, privativamente, como dijo La Nacion y corroboró El Siglo, la reglamentacion de la sociedad conyugal.

Resulta, además, que el llamado matrimonio civil es, segun juristas de la nota del Sr. Velez Sarsfield, un perpetuo concubinato en los católicos.

Y resulta, por fin, que una ley que lo autorizara en la República Argentina, seria una ley, traza injusta, perniciosa, corruptora y enervadora de las costumbres, y perturbadora de los pueblos y de las familias.

Mas compacta la constitucion social de nuestra República, mucho mas homogénea en su carácter y creencias por razon del menor número y diversidad de las inmigraciones que hemos recibido, una ley que autorizara entre nosotros el matrimonio civil, el perpetuo concubinato segun el jurista consultado, seria mucho mas injusta y mucho mas perniciosa que otra de igual carácter en la República Argentina.

«¿Qué es, pues, la ley actual? Para ello preguntámonos antes: ¿Es ley autorizada los llamados matrimonios civiles de los católicos? Hemos dicho cien veces: no. Pero La Nacion, La France, La Reason y aun El Siglo, dicen que sí, con tal que los católicos previamente abjuren y apostaten de su creencia religiosa.

Y bien; tal vez tengan razon, y de hecho la práctica de algunos jueces de la capital es conforme a esa doctrina.

Si esa práctica es legal, entonces se realiza lo que dice el Dr. Velez Sarsfield: la ley desconoce a los católicos, los trata como si no fueran católicos, y los obliga a apostatar de su creencia religiosa.

«¿Puede querer eso el Gobierno que la dictó? No, indudablemente. Lo que hay es, como ayer decíamos, que en aquel Gobierno, como en el actual, unos hacen y otros desahacen; unos llevan la voz de la moralidad, que fortifica, y otros la de la inmoralidad, que cubierta con valiosos engorrosos, no por eso deja de corromper y destruir.

«¿Ah si como se ven y se reparan los desiertos en materias obvias, se vieren tambien en otras materias? ¡Si como se ven y se reparan los desiertos, por ejemplo, en la legislacion Rural fuera posible verlos en la de educacion y en la de los actos civiles! Y, sobre todo, si los elementos sanos que hay en el Gobierno pudieran sorprender en sus mas recónditos abismos, en sus intenciones mas negras y mas ocultas, la obra de destruccion que se prepara!

«¿Qué lástima, Señor, qué lástima que los Gobernantes en ciertos momentos dados no las sea posible penetrar el porvenir!

Bienes eclesiásticos y las cuestiones de maravedises

La Nacion y El Siglo, con esa esquisita caballerosidad que los distingue, dicen en sus números de ayer, que de los registros civiles hemos hecho una cuestion de maravedises.

No necesitamos vindicarnos sobre este punto, pues los que hubieron leído nuestro artículo de ayer, saben bien que nuestros colegas, estimables, desinteresados, verídicos y ponderosos, nos han estado leyendo y comprendiendo mal.

Pero puesto caso que quisiéramos traer a colacion el carácter de los rendimientos eclesiásticos, así de las asignaciones consignadas en los presupuestos como de las cuotas que, por razon de derechos, perciben las parroquias, no habrian de faltarlos argumentos en que apoyar las tesis siguientes:

1.ª La apropiacion de los bienes eclesiásticos por parte del Estado, fué un atentado al derecho de propiedad.

2.ª La subrogacion así de las asignaciones presupuestadas como de la sancion civil de los derechos parroquiales, no puede ser alterada hoy sin cometer otro atentado al derecho de propiedad.

El Siglo nos pregunta que cuando tuvo lugar el despojo de la Iglesia. Confesamos que en lo que toca a esta Republica, aun no hemos hecho un detenido estudio del caso. De Francia, sabemos que fué en 1789; de España en 1835 y siguientes; de la Argentina en el gobierno de Rivadavia. Por lo que hace al Uruguay, dos cosas hay fuera de toda duda: 1.ª que la Iglesia era propietaria; 2.ª que hoy no lo es. ¿Cómo se ha efectuado eso? Puede ser que dentro de breves dias podamos decirlo a El Siglo. Por hoy nos bastará con darle a nuestro colega el siguiente hucelido que tiene bastante para roer:

Montevideo, Diciembre 31 de 1838.
El General en Jefe del ejército constitucional etc.

Art. 1.º Queda extinguida la Comunidad de los Regulares Observantes de S. Francisco de esta capital.

Art. 2.º La casa-convento con todas sus oficinas, dilas y enseres que correspondian a dicha comunidad, son bienes públicos y entran en la administracion general de estos.

Art. 3.º El Rvdo. Vicario Apostólico se servirá pasar a la Secretaría de gobierno una nota circunstanciada de todos los religiosos que existen en el territorio de la República, pertenecientes a la comunidad suprimida, para proveer lo conveniente a su decente subsistencia.

Art. 4.º Comuníquese etc.

RIVERA
Santiago Vazquez, Enrique Martinez.

De modo que, aquí como en Francia, España, Italia, y en todos los países sud-americanos donde se expropiacion tuvo lugar, ora haya sido violenta ora pacífica y lentamente, las asignaciones presupuestadas o el apoyo que el poder civil ha prestado a las parroquias para que percibiesen, aun por justicia, los derechos de pío de altar, tienen el carácter de una indemnizacion y descansan sobre incontestables títulos de justicia.

Tan es así, que el Consejo de Estado acaba de decidir en España una demanda contenciosa interpuesta por un canónigo que era a la vez catédrico y a quien una real orden de 1875 venia a privarle del uso del otro de esos cargos, declarando que queda sin efecto la real orden impugnada de 28 de Octubre de 1875, y apoyando esa resolucio sobre considerandos muy dignos de meditacion, entre los cuales se cuenta el siguiente:

Considerando que la prohibicion sobre simultaneidad de dos ó mas destinos, sueldos, comisiones y cualesquiera otros emolumentos establecida por la ley de 9 de Julio de 1855, no alcanza a los catédricos investidos de cargos eclesiásticos, porque estos cargos no pueden estimarse como destinos ni como comisiones, NI TAMPOCO COMO BUENOS DE LOS BIENES OCUPADOS A LA IGLESIA, ni dicha asignacion como emolumentos devengados en dependencias del Estado, circunstancia necesaria para que sea aplicable la prohibicion de la ley...

Esta resolucio lleva la fecha de 20 de Marzo del año corriente, ha sido insertada en la Gaceta, y de allí la toma integra El Siglo Futuro en su número del 30 de Mayo que podemos poner a la disposicion de El Siglo.

Véase, pues, que no nos faltarian títulos para hacer de la cuestion Registral—no una cuestion de maravedises, sino una discusion de cumplimiento de compromisos, de intereses muy altos, y de principios muy respetables para los individuos como para los gobiernos.

Hé aquí unos liberales francos

Registrando los diarios últimamente venidos de las Repúblicas del Pacifico, hemos tropezado con una verdadera joya. Se trata de una declaracion liberal y del saqueo de un Banco.

Cuanto a la declaracion, es curiosísima y tiene mas puntos de contacto con nuestra situacion, de lo que pudiera parecer a simple vista.

Supongamos, en efecto, que el pueblo uruguayo, volviéndose hacia los que le imponen la obra

social: «Señores ¡y con qué derecho nos violentáis así! ¡No somos lo mas! ¡No somos los llamados liberales! ¡No somos los que os pagamos! ¡Porque, pues, dais a nuestros dineros la inversion mas directamente reprobada por nuestra conciencia!

Supongamos que preguntaran así, ¿qué es lo que contestarían?

Probablemente, nadie contestaria nada: pero la obra seguiria su marcha.

Y esta pregunta pudiera repetirse a propósito de otras muchas cosas. Y sucederia lo mismo: los liberales, los pocos y mal avenidos liberales que traseñan a todo un pueblo al retortero, no despegarian los labios.

Los liberales de Colombia han sido mas explicitos. Oprimen, roban a los católicos; no bastándoles ya el invertir contra el derecho de estos las rentas del Estado, se apoderan en los Bancos de los depósitos pertenecientes a conservadores confiscados en beneficio del Estado, vale decir, en provecho de los administradores del Estado.

Pero de paso que hacen todo eso, declaran que lo hacen porque sí, y que los códigos no reza con los conservadores, sino que hay que ponerlos bajo la mesa.

En la asamblea del estado de Condumamarca (porque tambien esos estados tienen asambleas) un disputado llamado D. Francisco E. Alvarez, desechando las quejas sobre fraudes electorales interpuestas por los conservadores, les dijo a estos, liberales y francamente,

«Teniendo los conservadores, como tienen, una inmensa mayoría numérica y contando con las grandes influencias del pais, no ha habido otro medio de impedirles que recuperen por las elecciones el poder que perdieron por las batallas El grande error del partido liberal consistió en organizar el país después de un triunfo armado, concediendo a los conservadores derechos políticos para verse después en la necesidad de recurrir al fraude, a la violencia, al descrédito de las instituciones y al desconocimiento de la legalidad, para hacérselos nugatorios. Y nugatorios tenia que hacérselos, puesto que no debía ser tan estúpido que se dejase quitar con papales lo que habia ganado con las armas. Sopa pues, el señor Holguin que nosotros los liberales jamás hemos pretendido gobernar en Colombia a título de mayor número, pero reconocemos nuestra minoría. Gobernamos con los títulos que nos dan la inteligencia y la fuerza pues de ambas cosas hemos necesitado para vencer a los conservadores, y venciendo hemos probado que las tenemos.

El partido liberal manda aquí, porque lo ha ganado al partido conservador tres batallas decisivas: la de Boyacá en 1819, por la cual salieron de aquí los españoles; la de 1831, contra Urdeneta, y la de 1861, con la que el general Mosquera dió en tierra con el gobierno del señor Mariano Ospina. Esos son nuestros títulos y el partido liberal debe ser bastante franco para reconocerlos como la fuente única de su poder, y en consecuencia declarar que mientras no sea vencido por las armas, no concederá a los conservadores derechos políticos, como tampoco debe reclamarlos el día en que él sea vencido.» (Los Andes de Guayaquil, núm. del 24 de Mayo de 1879.)

Esta declaracion, ya que no otra cosa, tiene el singular mérito de la franqueza. Vencieron los liberales! Pues qué santificado todo cuanto hagan para vencer! ¡Ocupen ellos el poder! Pues no hay mas que hablar: aorta y justo es como ordenaren. La teoria es igual allí que aquí; solo la franqueza es distinta.

¡Pero se quiere saber qué han sido las guerras de los conservadores en Colombia! No hablemos de las antiguas: hablemos de la reciente, de la que se produjo en 1876 y de los alzamientos parciales ocurridos a los principios del corriente año de 1879. Pues no hay sino examinar quienes las provocaron.

Los Estados Unidos de Colombia son un país americano, dividido en varios estados, cada uno con su gobierno propio y regidos todos por instituciones democráticas, como las nuestras. Los habitantes son católicos; pero no los son los gobernantes. Y pasó allí que los gobernantes, en vez de acomodarse al pueblo que regian, le pusieron en un potrero, le estrujaron y trataron de acomodarlo a lo que ellos querian.

El potrero es una máquina de tormento que tiene varias ruedas. Puesto allí el pueblo, diaron los gobernantes una vuelta, y cayeron las escuelas sin religion. El pueblo dió un quejido, y como la boca del pueblo, en estas materias, son los Obispos, los Obispos diaron pastorales. El gobierno se dijo: «¡tapemos la boca», y expulsó del territorio a los Obispos. Pero como el grito de alarma estaba dado, los fables no enviaron ya sus hijos a las escuelas del Estado, sino que fundaron escuelas propias y empezaron a servir de ellas.

«¿Qué hicieron entonces los gobernantes? Diaron disposiciones que dificultaban el establecimiento de esas escuelas, pero fueron llenadas todas las formalidades, y las escuelas siguieron. «¡Malo, se dijo el Gobierno: es menester que esas escuelas se cierran.» Y no se sabe de donde, empezaron motines contra las escuelas, y fueron cerradas por motivos de orden público, y perseguidos los maestros y los padres de los niños.

Al fin se produjo un alzamiento, vino una guerra y el Gobierno venció. Por dos años todo quedó en paz. Mas ahora a principios de este año los liberales colombianos han empezado a moverse entre sí, sobre si tal o yo el otro ha de ser el Presidente de la Union. Y en el estado de Antioquia se ha producido en el mes de febrero una sublevacion. El Presidente de ese Estado, es liberal, muy liberal, tanto que es el candidato que cuenta con mas probabilidades para la futura presidencia de todos los Estados de la Union.

Pues bien, ese Presidente, que se llama el señor Rengilio, salió a campaña para batir a los liberales. Y sabe, pueblo uruguayo, que fué lo primero que hizo al disponerse a salir a campaña.

Leó los documentos siguientes que, a bien que largos son interesantísimos, porque pueden servirte para guardarte del liberalismo de los liberales:

«En la ciudad de Medellín, a los 18 dias del mes de febrero de 1879, el secretario de Hacienda y Fomento que suscribe, asociado del Sr. Lazaro Latorre, jefe de la 2.ª seccion de dicha Secretaría, se presentó en el local del Banco de Antioquia, a é hizo renir la Junta Administrativa de dicho establecimiento, la cual la componen los Sres. Francisco A. Alvarez, Director Gerente, y Trómpo y Carlos Restrepo 1.º y 2.º Administradores, respectivamente; estando la Junta reunida, a é les intimó las órdenes telegráficas del ciudadano Presidente del Estado, de fechas 13 y 14 del corriente mes, cuyo tenor es el siguiente:

«Telegrama Oficial.—Abogeral, 1879, Febrero 13.—Señor Secretario de Hacienda.—Medellin. Hago Vd. que los depósitos del Banco de Antioquia, pertenecientes a los conservadores de que hablamos allí, pasan a la Administracion general

del Tesoro. Se tendrán, mientras no se disponga otra cosa por mí, como dinero del Gobierno. Esto debe hacerse inmediatamente sin admitir evasivas ni ningunas especies. Confió en mi probada energia de usted. Todo sigue admirablemente.—Firmado.—Tomás Restrepo.—Auténtico, Adolfo Morales.»

«Telegrama oficial.—Abogeral 1879, Febrero 14.—Señor Secretario de Hacienda.—Medellin.—Recibí su telegrama de ayer sobre depósitos; no cito leyes: haga trasladar inmediatamente ese dinero a la Administracion del Tesoro pues en circunstancias como estas hay que poner los Colóns debajo de la mesa. La situacion es apremiante: en este momento mismo pido para el día D. Como que se encuentra allí con alguna gente. Hay pues que seguir obrando con mas energia y actividad que antes.—Firmado.—Tomás Restrepo.—Auténtico.—Adolfo Morales.»

«En consecuencia de estos órdenes, se exigieron a los conservadores correspondientes a los individuos siguientes:

Barolomé Chaves \$ 4,502.31
Vicente B. Villa & Hijos 28,700.85
Hernández Arango 1,300.00
Enrique Huerta 800.00
Manuel A. Valencia 5,175.32

Suma \$ 40,478.38

«A esta intimacion, la Junta contestó que no estaba la cantidad que se le pedia, tanto por que el Banco era responsable de ella en todo caso, como porque el artículo 26 del reglamento de los Estatutos del Banco prohibe expresamente entregar depósitos alguno sin que preceda la entrega del documento expedido al interesado al tiempo de la impresion.

«El infrascrito Secretario insistió en que debía hacerse la entrega de la suma pedida, y esto por bien o por la fuerza. En este estado la Junta, a media del Administrador señor Prospero Restrepo, resolvió que por lo pronto se reuniese extraordinariamente la general de Accionistas con los socios del Banco que se pudieran hallar en ese momento; y citados los que estaban presentes en la ciudad, que lo fueron los señores Marcelino Restrepo, Mariano Uribe F., José Miguel Botero, Marco A. Santamaría, Luciano Santamaría, Carlos Restrepo, Luciano Restrepo y Teodoro Angol; llamada la lista, por los votos que cada uno representa, se vió que concurrían 45, y como el total de las acciones del Banco son 1,350, y para deliberar válidamente conforme al artículo 55 de los Estatutos se necesitaban 666 votos, no habiendo el quorum requerido, esta Junta se declaró por sí incompetente para ocuparse de asunto alguno.

«El Secretario de Hacienda como agente del Poder Ejecutivo requirió nuevamente a la Junta Administrativa para que se entregase la suma, y obtenida la misma negativa, para llevar a cabo todos los apremios del caso, llamó a los señores Emeterio Gonzalez, Prefecto del Departamento, y Mamerto Garcia, Administrador General del Tesoro, quienes inmediatamente se presentaron con una escolta armada. Requerido de nuevo el Director señor Alvarez, para que entregara la suma que se le pedia a las llaves de las Cajas, contestó que ni una ni otra cosa entregaria. Por esta negativa se le impuso una multa de mil pesos a dentro de dos minutos (intimacion que hizo con reloj en mano) no entregaba las llaves: pasados estos, se le confirmó dicha multa, y fueron llamados algunos soldados para que se apoderaran de su persona y violentamente le quitaran las llaves, las que pocos momentos antes él habia pedido al Cajas, y guardado en los bolsillos: los soldados se apoderaron del y extrajeron dichas llaves; pero antes de esto estaban ya listos los cerrojos que debian proceder a la apertura de las Cajas. En posesion de las llaves, el Secretario de Hacienda que suscribe mandó que se abriera una de las Cajas, y habiendo ofrecido el señor Prospero Restrepo al Director ó al Secretario una indemnizacion de mil pesos, no se pudo retirar las segundades de mi mayor consideracion y aprecio.

«En este estado, el Secretario que suscribe mandó devolver las llaves al Director para que continuase las operaciones del Banco, pero que éstas las tenga siempre, ó hasta nueva orden, a la disposicion del Gobierno, para hacer cuando le venga la necesidad de que se han mandado retener en el Banco por depósitos hechos en él.

«Estos documentos relevan de todo trabajo al contestador. Son tan explícitos como la declaracion del diputado que al principio hemos copiado, y están diciendo a voz en grito qué es lo que pueden pretender los católicos, llamados en Colombia conservadores, el día en que los conservadores campeonen a la justicia, del derecho, de la ilustracion y de todas las otras cosas que el Sr. Varela y sus sostenedores quieren enseñarnos a viva fuerza; el día, en fin, en que los amigos de la libertad y de la escuela laica, lleguen a poder hacer mangas y capirotes con los pueblos.

«¡Dios aleje de tí esos dias, pueblo uruguayo!

Legislacion Rural

El señor don Emiliano Ponce de Leon ha presentado a la Junta Directiva el siguiente proyecto como ampliacion al Código Rural.

La Junta Directiva ha resuelto publicarlo, pidiendo a los socios y a la prensa su opinion al respecto, antes de proceder a discutirlo.

Hélo aquí:

AMPLIACION AL CÓDIGO RURAL

He creído conveniente redactar los cuatro artículos que en concepto del fuero firmado, deban agregarse a la seccion 5.ª del Código Rural no solo por estar consignado en nuestras Leyes el derecho propietario de tierras arrendadas, sino tambien para que haciéndose efectiva esa relacion, se valoricen las tierras destinadas a la agricultura y pastoreo, sin que se pueda eludir con embargos y apremios judiciales, el pago de la renta de la propiedad ó predio en que cultivan o pastorean como está sueldado, especialmente con los labradores de capital reducido, a quienes en la cosecha se les levanta el grano de la era ó del descalche, sin consideracion al arrendamiento que deben, y muchas veces, no se les deja para el consumo ni para semilla.

Rara vez podrá suceder esto con el propietario del campo, por tener la creencia que su haber está garantido por la Ley, dando esperanzas, a fin de que los inquilinos consigan el mejor precio para sus productos; y si esto sucede, no es justo ni equitativo, que mientras los propietarios de tierras arrendadas contribuyan al adelanto de los trabajos rurales se vean defraudados de lo que legítimamente les pertenezca, por sugerencias extrañas al dueño del predio arrendado, sin su conocimiento, y sin ser oído para hacer valer los derechos que le asistan.

Estas y otras muchas consideraciones que omito me deciden a formular los artículos siguientes:

Art. Las propiedades rústicas que se hubiesen arrendado para agricultura ó pastoreo, quedarán sus productos y demás bienes muebles y semovientes que posean los arrendatarios, en garantía del arrendamiento del año corriente.

Art. En consecuencia de lo preceptuado en el art. anterior, no se ejecutará ningún embargo que se hubiese trabado en virtud de gestiones a efecto, sin haber antes notificado al propietario arrendatario ó quien legalmente lo represente, haciéndolo conocer el litis pendencia promovida, para que ejerza sus derechos dentro del término legal.

Art. Si no se presentase dentro de ese término a deducir sus derechos de patrono, la parte ejecutante podrá pedir en tal caso lo que a sus derechos correspondiere.

Art. Si por el contrario, el arrendador se presentase reclamando arrendamientos no solo del año corriente, sino tambien por atrasados, aunque fuesen debidamente reconocidos, no tendrá derecho de preferencia sino al importe del último año.

Emiliano Ponce de Leon.

(De «La Asociacion Rural».)

SECCION OFICIAL

Junio 30, de 1879.
Exmo. señor Ministro de Hacienda, ciudadano don Aurelio Berro.

Señor Ministro:
Altamente agradecido a la confianza con que el Superior Gobierno me honró al confiarle el cargo de Inspector del Resguardo, a cuya capacidad creo haber correspondido dignamente, vengo a declarar el cometido, por razones que me son muy conocidas y muy apreciadas. Quiera V. E. así significarme al Sr. Presidente, y aceptar mi decidido empeño en servir a la actual Administracion en cualquier terreno, no solo como un deber de civismo, sino de adhesion a su marcha reparadora y de anhelo porvenir.

Con este motivo reitero a V. E. las consideraciones de mi mayor aprecio. Dios guarde a V. E. muchos años. Luis Recuelta.

Montevideo, Julio 3 de 1879.
Expedida el Decreto acordado y publicado. Rúbrica de S. E. Berro.

Ministerio de Hacienda.
Junio 30, de 1879.

Habiendo elevado su renuncia del cargo de Inspector del Resguardo el ciudadano don Luis Recuelta, el Presidente de la Republica acuerda y decreta.

Art. 1.º Aceptase la referida renuncia agradeciendo al interesado los servicios que ha prestado al pais en el cargo de Inspector del Resguardo.

Art. 2.º Nómbrase para subrogarlo al referido señor, al Coronel don Casimiro Garcia. Art. 3.º Comuníquese, etc.

LATORRE.

AURELIO BERRO.

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Montevideo, Julio 3 de 1879.
Después del Gobierno que el acto de la distribución de las recompensas obtenidas por los expositores misionales en la Exposicion Internacional de París, tenga toda la solemnidad debida, he resuelto enviar a esa Comision Central las medallas y diplomas respectivos, para de acuerdo con el maestro de Ceremonias oficial, dictar las medidas necesarias a fin de que la referida fiesta, que debe celebrarse el día 18 del corriente en el teatro Solís, se lleve a efecto con el mayor brillo posible.

Así mismo se ha resuelto que esa Comision formule un proyecto de ley que determine la forma que deberá adoptarse para la aprobacion de este Ministerio.

El Gobierno concurrirá al acto el cual será abierto por S. E. el Sr. Presidente de la Republica.

Esperando que esa Comision prestará como siempre su inteligente y patriótico concurso a tan simpática fiesta, me es grato reiterarle las seguridades de mi mayor consideracion y aprecio.

G. MENDEZ.

A la Comision Central de Exposicion.

DECRETO

Montevideo, Julio 3 de 1879.

Considerando que en las operaciones fiscales relativas a la importacion y exportacion de los llamados «frutos del pais», no está aun determinado el control que por regla general debe siempre intervenir en el movimiento de las rentas públicas; y teniendo en vista que el favor especial de que disfrutaban ciertos establecimientos particulares por el hecho de hallarse habilitados para el embarque y desembarque de artículos sujetos a imposiciones fiscales, el Estado ha acordado de exigir de los respectivos dueños ó encargados la cooperacion necesaria para mejor fiscalizar las operaciones de carácter aduanero que en los citados establecimientos tienen lugar.

El Presidente de la Republica ha acordado y decreta.

Art. 1.º Los dueños ó principales encargados de barricas, saladeros ó cualesquiera otros establecimientos particulares, que por tener acceso a los puertos ó vias fluviales de la Republica, se hallen habilitados para el embarque ó desembarque de frutos del país, carbon de piedra, maderas, otros artículos que se encuentren en igual caso, quedan obligados a:

1.ª A formar y remitir en cada día fúmes, a la mesa de control una relacion en que conste el desembarque diario durante la semana anterior, de los respectivos artículos procedentes de importacion extrajera, expresando fechos, nombre del buque, conductor, su procedencia, la clase de los artículos y su cantidad, peso ó medida, segun el caso correspondiente.

2.ª A formar tambien semanalmente en duplicado y remitir a la mesa de control a la Inspeccion del Resguardo, otra relacion en que conste, el embarque diario para exportacion durante la semana anterior, señalando el nombre del buque, carga, destino, destino y las mismas circunstancias de clases y cantidad, peso ó medida determinadas para la nota de la importacion.

Art. 2.º Las expresadas relaciones, serán pasadas en papel común y las firmará el dueño ó conductor de los respectivos buques, o el jefe de los establecimientos, o el encargado de su manejo, quedando el mismo, sujeto a multa o penales que correspondan en caso de fraude, engaño ó inexactitud en los datos que suministre al fisco.

Art. 3.º Lo dispuesto en este decreto empezará a regir, para los establecimientos de Montevideo y Santa Lucia, a partir del día 7 del actual, y para los demas puertos y costas de la Republica, del 4 de Agosto próximo en adelante.

Art. 4.º Por el hecho de entrar en ejecución lo dispuesto en el presente decreto, quedará sin efecto lo prescripto en el art. 16 de la resolucio gubernativa de 10 de Junio de 1876, relativamente al conforme que por dicha resolucio debían poner en los permisos respectivos los dueños ó encargados, principales de los establecimientos a que se refieren.

Art. 5.º Comuníquese, etc.

LATORRE.

AURELIO BERRO.

SECCION PARLAMENTARIA

Cámara de Representantes

Session del 2 de Julio

PRESIDE EL SEÑOR PRNALVA

Reunidos en el

Para pormenores, ocurrase a la agencia,
de Zavala núm. 174.
8 M. Llamas y Ca.

